

C.A. de Santiago

Santiago, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno.

A los folios 21 y 22: A todo, téngase presente.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, recurrió de amparo constitucional Francisco González Sepúlveda, abogado, en favor de los intereses de Eleager Jesús Suarez Tremont, de nacionalidad venezolana, en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por haber dictado Resolución Exenta N° 177 de fecha 25 de febrero del año 2021, que dispone la expulsión del país del amparado, lo que afecta y perturba la garantía constitucional de la libertad personal consagrada en el artículo 19 N° 7 de la Constitucional Política de la República.

Previas citas legales, tratados internacionales y constitucionales, solicitó que se acoja el recurso adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y, en especial, disponer dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 177, de 25 de febrero del 2021.

Fundando el recurso sostuvo que el amparado ingresó a Chile el 10 de febrero del 2017, de forma legal en calidad de turista. Su intención era quedarse en el país, pero el 12 de abril del 2017 fue arrestado por su participación en el de robo, por el que fue condenado el 26 de diciembre del 2018 a la pena de 3 años y 1 día de libertad vigilada intensiva, la que cumple de forma efectiva y con plena reinserción social -la pena de debería cumplir en diciembre del 2021-.

Refiere que el último tiempo creó un emprendimiento de compra y venta artículo de librería mediante venta on-line, lo que mantiene hasta la fecha como forma de subsistencia económica. También trabaja en el rubro del “delivery” en la aplicación de “Uber Eats”

Manifiesta que en el aspecto laboral, el 18 de marzo del 2021 suscribió un contrato de trabajo para una empresa de mensajería, y con la cual pidió visa sujeta a contrato, en actual tramitación. En cuanto arraigo familiar, sostiene que en Chile vive su hermano y su actual pareja, todos de nacionalidad venezolana.

Identifica la ilegalidad en el obrar de la recurrida ya que esta ha actuado de forma desproporcional, sin considerar el arraigo familiar y laboral del recurrente. Sostiene que mientras cumplió la libertad vigilada tuvo un comportamiento ejemplar, el que le permitió reinsertarse en la sociedad.

Afirma que la resolución exenta expulsatoria carece de motivación respecto la utilidad y ventaja de la permanencia del amparado. Cuestiona también que se señale como fundamento para la expulsión que el amparado atentó contra la moral y las buenas costumbres.



Sostiene también normativamente que el decreto de expulsión se sustentó en los artículos 15 N°2 y 17 de la Ley de Extranjería, pero se ha efectuado una restringida y errónea interpretación de la normativa aplicable, al encasillar la conducta del amparado en un supuesto de hecho que la norma que no tiene.

Argumenta que se vulnera el principio de tipicidad y que el decreto de expulsión adolece de correcta e idónea fundamentación. También, que el decreto de expulsión atenta contra los principios de culpabilidad y proporcionalidad que rigen el derecho administrativo sancionador.

Destaca que la resolución exenta expulsatoria no pondera correctamente que su permanencia no es peligrosa para la sociedad y se afecta el principio de “non bis in idem”, el que prohíbe que una persona sea enjuiciada dos veces por el mismo hecho, como lo sería la sanción penal y la administrativa.

Del mismo modo, afirma que se atenta contra el valor constitucional de protección de la familia, y atendido el estado actual de pandemia sanitaria, la expulsión es injusta y desproporcionada.

SEGUNDO: Que, informando -al folio 18, de 14 de mayo del 2021- Nicole del Pilar Sánchez Retamal, abogado, en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Departamento de Extranjería y Migración, pide el rechazo del recurso, ya que la orden de expulsión impugnada fue ordenada por la autoridad competente, dentro del ámbito de sus facultades legales, con estricto apego a la Constitución y las leyes, y por tener motivo plausible para ello.

Explica que actualmente el amparado se encuentra irregular en el país, y que el 29 de mayo del 2018 presentó solicitud de regularización extraordinaria la que fue rechazada el 22 de enero del 2019.

Luego señala que el amparado registra una denuncia en causa RIT 9638-2017 ante el 6° Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de uso fraudulento de tarjetas de crédito o débito, además de la condena de 3 años y 1 día por el delito de robo con intimidación.

Sobre los hechos cometidos por el amparado se dictó en su contra orden de expulsión, por proceder causales legales expresas, al tenor del reenvío al artículo 15 que hace el artículo 17 de la Ley de Extranjería, cuando alude a los extranjeros que durante su residencia incurran en alguno de los actos que enumera el artículo 15 en sus numerales 1, 2 y 4.

Por su parte, el citado artículo 15 en su numeral 2°, establece que se prohíbe el ingreso al país de los siguientes extranjeros: "los que se dediquen al comercio o tráfico ilícito de drogas o armas, al contrabando, al tráfico ilegal de migrantes y trata de personas y, en general, los que ejecuten actos contrarios a la moral o las buenas costumbres". Por lo que, atendido el delito robo con



violencia cometido por el amparado, se estima que se incurrió expresamente en la parte final de la causal citada.

Sostuvo que a juicio de la autoridad administrativa, la afectación a los bienes jurídicos vulnerados en este caso es de tal gravedad -como lo es la seguridad individual y la seguridad pública- que la medida que corresponde aplicar no es otra que la expulsión del país, ajustándose así a un estándar de proporcionalidad respecto de la actividad delictual desplegada por el recurrente.

Manifiesta que la lectura armónica que se debe hacer del artículo 15 y 17 de la Ley de Extranjería, es advertir el poder estatal para gestionar la migración en términos de definir los casos o situaciones en que no puede ser tolerada la presencia de un extranjero en territorio nacional, como lo ha sido en este caso. Además es irrelevante para configurar la causal la reincidencia, ya que el precepto legal no requiere habitualidad, y así lo ha entendió la jurisprudencia, la que cita.

A mayor abundamiento, señaló que el artículo 19 N° 7 letra a) de la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas "el derecho a residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la Ley, lo que no se respetó por el recurrente.

Finalmente sostuvo que tampoco existe una vulneración al principio non bis in ídem, ya que la disposición administrativa apunta a razones de bienestar común y de orden social, objetivos completamente diversos de aquellos que conllevaron a la sanción penal impuesta.

TERCERO: Que el recurso de amparo contemplado en nuestra Constitución Política se creó con el propósito de cautelar debidamente la libertad personal y la seguridad individual y, por lo tanto, cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo cuando los estime vulnerados o amenazados por actos ilegales y la Corte de Apelaciones correspondiente, en su caso, deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de amparo, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil-, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a uno o más de los derechos fundamentales protegidos, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.



QUINTO: Que luego de lo dicho, es menester relevar en primer lugar que conforme prevé el artículo 2° del D.L. 1094, para residir en el territorio nacional los extranjeros deberán observar las exigencias, condiciones y prohibiciones que se consignan en dicho texto legal.

En el caso en análisis, tal como se colige de los antecedentes acompañados al expediente, resulta indiscutido que con fecha 26 de diciembre de 2018 el amparado Eleager Jesús Suarez Tremont, de nacionalidad venezolana, fue condenado por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago como autor del delito de robo con intimidación a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, situación que conforme a lo estatuido en el artículo 17 del D.L. 1.094 determina evidentemente concluir que durante su residencia en el país incurrió efectivamente en uno de los actos previstos en el numeral 2° del artículo 15 del mismo texto legal, al haber ejecutado actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres, razón por la cual la medida de expulsión ordenada en su contra, mediante Resolución Exenta N° 177, de 25 de febrero de 2021, fue pronunciada por las autoridades facultadas para disponerlas, en un caso expresamente previsto por la ley, con observancia de las formalidades legales y existiendo mérito que así lo justificó, motivos por los cuales, evidentemente, no adolece ella de la ilegalidad que ahora se les representa;

SEXTO: Que luego de lo razonado, se desestimaré la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 21 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre tramitación de la presente acción cautelar, **se rechaza** el recurso de amparo interpuesto por los abogados Francisco González Sepúlveda y Marcelo Muñoz Ferrer, en favor de Eleager Jesús Suarez Tremont, en contra del Departamento de Extranjería del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelaré.

N°Amparo-1537-2021.





VFTXJUTVQX

Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mario Rojas G., Fernando Ignacio Carreño O., Maritza Elena Villadangos F. Santiago, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno.

En Santiago, a dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>